

# La violencia en Colombia: inercias y novedades 1945-1950, 1985-1988

Medófilo Medina,  
*Profesor Asociado*  
*Director de Postgrado de Historia,*  
*Universidad Nacional*

## Introducción

El presente trabajo es, ante todo, un intento de análisis de la relación entre violencia y crecimiento económico en dos períodos de la historia contemporánea de Colombia. Se relaciona también la violencia con algunos aspectos del sistema político. El enfoque comparativo lleva aparejado el riesgo de la fácil homologación de situaciones diferentes, a partir de similitudes externas o francamente circunstanciales.

Para evitar el simple juego de analogías se buscará, en primer lugar, ubicar cada uno de los períodos en el respectivo contexto histórico dentro de la historia colombiana del siglo XX.

El enunciado violencia y economía inevitablemente evoca a las que se denominaron como las grandes explicaciones causales de la violencia. En efecto, entre los modelos globales sobre la violencia que azotó al país en los años comprendidos entre 1945 y 1964 conquistaron lugar destacado aquellos que reconocían en factores económicos la causa fundamental de la violencia. En unos casos esos factores se asociaban a la negativa de la oligarquía a profundizar los cambios iniciados en el período anterior. Tal fue el punto de vista sustentado por Francisco Posada.<sup>1</sup> En esta visión el resultado de la violencia se identifica con la consolidación del subdesarrollo.

Compartiendo la idea sobre las causas económicas de la violencia, otros autores como Mario Arrubla, Estanislao Zuleta y Salomón Kalmanovitz valoraron la barbarie desatada en los campos como el tributo pagado por una sociedad rural tradicional al desarrollo capitalista o, dicho de otro modo, sería el modo peculiar que habría asumido en Colombia la acumulación originaria de capital.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Posada, Francisco: *Colombia: violencia y subdesarrollo*, Ed. Universidad Nacional, 1966.

<sup>2</sup> Arrubla, Mario: *Estudios sobre el subdesarrollo colombiano*, Bogotá, 1968.

Trasladada la anterior argumentación al plano sociológico da lugar a la afirmación de Weinert, según la cual la Violencia se habría originado en el temor de los campesinos a la modernización.

Las explicaciones globales no fueron inútiles, pues contribuyeron a entender momentos de la Violencia y estuvieron asociadas a una etapa de los estudios sobre la Violencia. Su debilidad radicó en la presentación de dar una explicación totalizadora, generalmente a partir de un factor. Desde hace dos lustros se impuso la idea en las ciencias sociales colombianas sobre el carácter multifactorial de la Violencia y sus causas y sobre la diversidad de sus manifestaciones en contextos regionales diferentes.

En el presente trabajo son necesarias dos aclaraciones: primera, la relación violencia-economía no se concibe en el contrapunto de causa a efecto. Segunda, no se erige a la economía como factor explicativo único. Sin embargo se toma la economía como uno de los elementos que están presentes en las diversas fases del proceso de la Violencia y como fuerza que actúa en todas las regiones, aunque en cada una de ellas se imbrique de manera distinta con los factores políticos, sociales, culturales, etc. Rastreado la violencia a través de la economía se podrá identificar, no ciertamente la explicación total, pero sí se podrá identificar una de las lógicas de la Violencia. En efecto, la renuncia a las grandes explicaciones causales no puede dar paso a la visión fragmentada de la violencia o a la renuncia a la búsqueda de modelos explicativos comprensivos. Si algo suscita desacuerdo en el libro *Colombia, violencia y democracia*<sup>3</sup> es el orden de paralelismo en que se presentan las violencias: violencia política, violencia urbana, delincuencia común, violencia familiar. Para cada una de estas violencias se propusieron políticas y soluciones particulares.

La regionalización del estudio sobre la violencia que está lejos de agotarse, así como la tematización de elementos de la violencia, están sentando bases sólidas para nuevos intentos de estudios desde la perspectiva global.

En el presente ensayo se intenta abordar relaciones entre la violencia y otros fenómenos bajo los siguientes enunciados: violencia y desarrollo económico, los lazos entre la violencia urbana y rural y la violencia en contraste con las frustraciones de alternativas populista. Todo ello enmarcado en una perspectiva comparativa con respecto de los períodos: 1945-1950; 1984-1988.

## Desarrollo económico y violencia: 1945-1950 Y 1984-1988

### Características del desarrollo económico 1945-1950

En octubre de 1949 el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), refiriéndose al estado de la economía declaraba: "He repetido muchas veces en las últimas semanas mi concepto sobre el particular que es muy optimista y que se basa en hechos concretos, como son el precio del café, los aumentos muy considerables en la producción

<sup>3</sup> *Colombia: violencia y democracia*, informe presentado al Ministerio de Gobierno, Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial, Bogotá, 1987.

<sup>4</sup> *El Tiempo*, Bogotá, 21 de octubre de 1949.

agrícola e industrial, la oportunidad de los pagos internacionales y el equilibrio en la balanza de los pagos."<sup>4</sup> Pero era ese el tiempo menos adecuado para que un colombiano hiciera comentarios risueños sobre su país. Octubre de 1949 es como se verá en unos párrafos adelante un mes de los más sangrientos de la historia colombiana. Se trataba de la preparación de las elecciones presidenciales que tendrían lugar el mes siguiente. Sin embargo, el presidente de los industriales identificaba la situación del país con la ventura del gremio. En términos aún más optimistas se refería a la situación económica el gerente del Banco de la República, Luis A. Arango, en diciembre de ese año aciago.<sup>5</sup>

Vivía la economía una etapa de bonanza. Los índices más globales y conocidos así lo dejan ver: entre 1945 y 1949 el producto interno bruto, el producto interno per cápita y el ingreso nacional bruto se incrementaron a una tasa anual del 5.9%, 3.6% y 7.5% respectivamente.<sup>6</sup> Pero la particularidad del período no radica únicamente en el crecimiento. El quinquenio 1945-1950 representa, de un lado, la consolidación del desarrollo alcanzado hasta entonces por el capitalismo y el comienzo de transformaciones estructurales vinculadas al cambio de la correlación de los diversos sectores económicos y el desplazamiento de grandes contingentes humanos entre zonas diversas y entre campo y ciudad.

La industria fue el sector que sirvió de eje de los cambios. Entre 1945 y 1953 la industria creció a la tasa récord anual del 9.2% no registrada antes ni después de ese período. La modalidad de sustitución de importaciones debía ahora interesar a bienes intermedios y durables. Surgieron nuevas ramas intensivas en tecnología y, por ende, en capital, tales como las de industrias de papel y pulpa, industrias mecánicas, metalúrgicas y de productos de caucho. Entre 1946 y 1948 los bienes de capital representaron el 45.6% del total de las inversiones del país. Se disponía de divisas acumuladas por la imposibilidad de acceso libre a los mercados internacionales durante la Segunda Guerra Mundial y también por el incremento de los precios del café en la postguerra. El valor total de las exportaciones de café pasó de 104.5 millones de dólares en 1945 a 307.2 millones en 1950. Sin embargo, la fiebre de capitales difícilmente podía satisfacerse con tales recursos. La presión por el incremento de la norma de explotación era evidente. La confrontación entre intereses de industriales y obreros se expresaba, por ejemplo, en posturas contrapuestas en relación con la tendencia a la inflación. José María Bernal, ministro de Hacienda, plasmó el punto de vista de los empresarios en la expresión del "ideal de la vida cara". Por su parte, desde 1943, la CTC había agitado como una de sus consignas centrales el establecimiento de una política gubernamental de control de precios.<sup>7</sup>

Los gremios y el Estado coincidían en la estrategia económica. La industrialización fue vista como el supremo desiderátum. Con razón, José Antonio Ocampo señala el respecto; "De esta manera, una estrategia que había surgido más bien por fuerza de las circunstancias externas a comienzos de los años treinta se hizo cada vez más consciente a lo largo de la República Liberal, y a finales de dicho período se había convertido en una verdadera ideología nacional."<sup>8</sup> A nivel continental esa plataforma se sustentaría teóricamente por Raúl Prebisch y se optaría oficialmente por la Cepal.

<sup>5</sup> *El Tiempo*, diciembre 2 de 1949.

<sup>6</sup> Urrutia Montoya, Miguel. *Cincuenta Años de desarrollo económico colombiano*. Ed. La Carreta, Bogotá-Medellín, 1979, p. 16.

<sup>7</sup> Citado por Daniel Pecaut. *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*, Cerec. Siglo XXI Editores, Bogotá, 1987, p. 442.

<sup>8</sup> Ocampo, José Antonio (editor): *Historia económica de Colombia*, Fedesarrollo, Siglo XXI Editores, Bogotá, 1987, p. 260.

A comienzos de 1950, comentando el Informe Currie, el presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Eugene Black, presentaba la situación de las masas colombianas en estos términos: "El nivel de vida de la gran mayoría del pueblo aparece como lamentablemente bajo. La mayoría ha recibido muy poca educación; la salud del pueblo es mala; su albergue, pobre; su dieta, mal equilibrada. Además, disfruta de muy pocas comodidades de vida."<sup>9</sup>

La estrategia se encontraba con el formidable escollo del bajo nivel de vida de la población, de la estrechez del mercado interno y de la inestable provisión de divisas por parte del sector externo. Ya en principio en esas circunstancias se anidan potenciales de violencia.

Secundariamente la estrategia del desarrollo implicaba la modernización de la agricultura que se vio favorecida por los mismos mecanismos diseñados para incentivar el desarrollo de la industria.

Sería muy importante en el orden de argumentación del presente ensayo contar con aproximaciones a lo que podría llamarse una sociología de las clases dominantes y particularmente del empresariado. En épocas de cambios que implican mayores ritmos en la acumulación de capital surgen también nuevas capas de hombres de negocios generalmente dotados de audacia y carencia de escrúpulos. Aparte de las evidencias periodísticas no se dispone para el período en cuestión de estudios documentales.

## La violencia

No se pretende aquí la evaluación de la violencia. Nos contentamos con algunas afirmaciones de tipo enunciativo. Al paso que los índices presentados en el numeral anterior y otras cifras que no se han consignado reflejaban el buen suceso de la economía, la violencia venía avanzado desde 1946. Ya hoy nadie sostiene que el comienzo de la violencia deba ubicarse el 9 de abril de 1948. Esta fecha abrió un capítulo nuevo en un proceso iniciado al menos de tres años antes. En las ciudades se reprimían las manifestaciones obreras. Las concentraciones gaitanistas también cosechaban víctimas. A finales de 1949 la violencia campeaba en regiones de ocho departamentos. El genocidio se convirtió en fenómenos de ocurrencia ordinaria. Una revista de prensa del segundo semestre de 1949 ofrece una idea de la magnitud de la matanza. En Belalcázar (Cauca), 112 personas fueron fusiladas en un solo día; en El Playón (Santander), la policía incendió el poblado asesinando a 50 de sus habitantes; en Anserma (Valle), el 20 de Septiembre, fueron asesinadas varias personas. A finales de agosto el ejército atacó el municipio de Saboyá, en el occidente de Boyacá, dejando un saldo de 80 muertos y más de 1.000 campesinos desalojados.

Por esos días un periódico regional escribía: "La tierra en el norte del Valle se ha convertido en tierra sepulcral". El 7 y 8 de ese mes fue arrasada la aldea de Betania: 260 cadáveres de campesinos con pasmosa frialdad hombres, mujeres y niños reunidos en la Casa Liberal de Cali. El 27 de octubre fue arrasado Ceylan a bala, fuego y dinamita. En el poblado de San Rafael la policía fusiló a campesinos liberales y arrojó sus cadáveres al río. Las matanzas dejaron un saldo de 150 muertos en Ceylán y 27 en San Rafael. A finales de octubre se produjo el incendio y destrucción de Arauca (Caldas).

---

<sup>9</sup> *El Tiempo*, febrero 28, 1950.

---

## Muertos por la violencia en la segunda mitad de los años cuarenta\*

---

Año	Núm. de muertos
1947	13.968
1948	43.557
1949	18.519
1950	50.253
Total	126.297

---

\*Paul Oquist. *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Instituto de Estudios Colombianos, 1978, p. 59.

---

Las muertes por la violencia constituyen el indicador más trágico y representativo de la intensidad de la misma en la segunda mitad de los años cuarentas.

Se tratará ahora de examinar el vínculo interno, y como se pretende, necesario entre la expansión económica y la violencia en la coyuntura de 1945-1950. Arriba se insinuaron algunos factores de violencia que se originaron en las condiciones mismas del desarrollo económico como éste se realizó durante el período. Sin embargo, es preciso analizar con mayor atención cuáles son los problemas específicos que cumplen la función de mediación entre violencia y economía.

Difícilmente el análisis sobre la violencia puede focalizarse en la contradicción capital-trabajo. La primera trasciende a la segunda, la incorpora en un conjunto mayor de conflictos de naturaleza diversa. No obstante, cuando se esboza la relación violencia y economía es preciso empezar con el escrutinio de las modalidades en que se presenta la contradicción típica del capitalismo.

Formulada la estrategia económica, las clases dominantes buscaron despejar factores de que valoraban como obstáculos a la marcha triunfante de la economía. El primero de ellos era el de la intervención estatal que se suponía excesiva. Más claramente las élites económicas se orientaban por un modelo liberal acondicionado a una economía de mercado en ascenso. Daniel Pecaute ha hablado del "desmonte de la ideología de la regulación estatal". El Estado debía asumir de manera iniquívoca el papel de garante de la estrategia de desarrollo.

Ello implicaba antes que la reducción del papel del Estado en general, su encauzamiento en una dirección. En efecto, ya con la creación del IFI en 1940 y con el Fondo Nacional del Café, el Estado se dotó de instrumentos para dirigir inversiones hacia la industria. En el mismo sentido se reacondicionaron las formas tradicionales de intervención: la política arancelaria y el control de las importaciones.

Lo que realmente los grupos empresariales exigían con mayor ahínco era el abandono de la función de árbitro con la cual la República Liberal había querido revestir al Estado. Las contradicciones obrero-patronales debían resolverse en el ámbito de la empresa.

Alberto Lleras Camargo que supo captar el sentido de los virajes de las clases dominantes fue el político escogido para instaurar el tipo de régimen que la estrategia económica

demandaba. En un discurso dirigido a la ANDI, Lleras habló de los "abusos" de las organizaciones sindicales y añadió: "la explotación sin vergüenza de las facilidades ofrecidas por las leyes sirve sólo para frenar el desarrollo progresivo de la política social."<sup>10</sup> El presidente acogía el punto de vista empresarial "freno a las demandas obreras con miras al logro de elevadas tasas de ganancia".

El temor de los capitalistas hacia el movimiento sindical se alimentaba en la distorsionada interpretación de algunas realidades del sindicalismo. De los 1.276 sindicatos, que según el censo sindical de 1947 se habían fundado en 1937 y 1947, 613 -apenas menos de la mitad- lo habían sido en dos años: 1944 y 1945.

Quizá el motivo mayor de preocupación para las clases dominantes era la activa expansión del sindicalismo en la industria.

---

### Sindicatos en la industria en Bogotá, Medellín y Cali\*

---

Fundados antes de 1944		Fundados entre 1944 y 1947	
Sindicatos	Sindicalizados	Sindicatos	Sindicalizados
25	3.267	61	9.508

---

\* Censo sindical de 1947.

---

Era preciso someter a ese sindicalismo que era visto en perspectiva como una grave amenaza para el proyecto económico.

Un acontecimiento permite ubicar el viraje del Estado frente a los conflictos sociales y al sindicalismo: la huelga de Fedenal y la represión del Estado y los empresarios: a comienzos de diciembre de 1945 los trabajadores del río Magdalena agrupados en Fedenal, federación de la CTC, se declararon en huelga. El movimiento fue rápidamente ilegalizado por el ministro de Trabajo. En la medida en que se proyectaba una estrategia nueva hacia el sindicalismo, no se produjeron intentos de negociación. Al día siguiente de la declaración de huelga, el presidente de la República señaló que era preciso eliminar una supuesta "creencia nacional" en la existencia de dos Gobiernos, uno en Bogotá y otro en el río Magdalena. La declaratoria presidencial respaldó la intransigencia de los patronos, quienes pasaron a despedir a numerosos trabajadores, y abaló la represión militar a los huelguistas. Los voceros de los gremios, representantes de la Iglesia, y dirigentes de los partidos aclamaron la conducta del Gobierno.

El conflicto del río Magdalena ofreció al Gobierno excepcionales posibilidades para presentar de manera inequívoca frente a los trabajadores y a la opinión nacional cuál sería en adelante la conducta oficial en el tratamiento de las relaciones obrero-patronales y la

---

<sup>10</sup> Alberto Lleras Camargo. Citado por Daniel Pecaut, *Ibid.*, p. 408.

posición hacia la organización sindical. En efecto, Fedenal era la organización más importante de CTC, hasta entonces central única. Los trabajadores a ella afiliados habían alcanzado las mayores conquistas sindicales. La represión a Fedenal afectaba notablemente la influencia del Partido Comunista en la organización sindical. Al tiempo se asestaba un golpe a la CTC, al debilitar su federación más importante. Con ello se buscaba la superación del "sindicalismo político."

Habiendo quedado establecida la eliminación de la idea del Estado-árbitro en los conflictos sociales, la oligarquía concentró su esfuerzo en dos direcciones en su ofensiva antisindical:

1. Supresión del sindicalismo como actor político.
2. Creación de un sindicalismo confesional y sometido.

Los principales momentos de este proceso entre 1945 y 1950, fueron:

1. Tendencias a la ilegalización de las huelgas.
2. Represión militar de las manifestaciones obreras principalmente en Bogotá y Cali. Como resultado de la acción de la fuerza pública sobre los manifestantes se producían víctimas.
3. Autorización por parte del Gobierno del despido de trabajadores, que fueron muy numerosos en 1947 y luego del 9 de abril de 1948.
4. Estímulo a la división de la CTC que se fracciona temporalmente en su VII Congreso realizado en Medellín en agosto de 1946.

Esa política avanzaba en medio de una campaña ideológica que denunciaba al sindicalismo y lo descalificaba como factor independiente en el sistema político. No faltaron en el concierto las voces de la jerarquía católica a través de prelados como el arzobispo de Medellín, García Benítez, y Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, quienes habían prohibido a los trabajadores bajo pena de excomunión afiliarse a Fedeta, filial en Antioquia de la CTC. La ANDI, a su turno, había pedido desde noviembre de 1945 la eliminación del fuero sindical.

Los sectores del sindicalismo agrupados en la CTC resistieron la ofensiva antiobrero. Esa resistencia se expresó entre 1945 y 1950 en los siguientes aspectos:

1. Incremento del movimiento huelguístico. Las huelgas no bajaron entre 1945 y 1948 de diez por año, lo cual señala un promedio relativamente alto en el movimiento huelguístico de los años treinta y cuarentas.
2. Reiteración de la convocatoria a huelga nacional por parte de la CTC y a huelgas regionales por parte de sus federaciones. Algunos de esos llamamientos se llevaron a la práctica.
3. La radicalización de sectores obreros como el de los trabajadores del petróleo que enarbolaron las exigencias de la nacionalización del petróleo.

Lo evidente, sin embargo, era que la correlación de fuerzas se definía aceleradamente en favor de los gremios y de las corrientes que buscaban una restauración reaccionaria. Ese desarrollo de los acontecimientos se veía estimulado por las debilidades de la CTC y de los sectores políticos que la apoyaban: grupos liberales y Partido Socialista Democrático, nombre que por entonces había adoptado el Partido Comunista.

Jorge Eliécer Gaitán, al cual nos referiremos más específicamente en otro apartado del presente trabajo, se proyectaba con enorme fuerza en el panorama político, pero desenvolvía su acción en una lógica distinta y a menudo enfrentada al movimiento que en el plano gremial impulsaba la CTC.

Con los anteriores desarrollos se quebró el *compromiso histórico* establecido en 1936, aunque no pactado explícitamente y sobre el cual había descansado la República Liberal: tal compromiso "acordado" entre una constelación de élites burguesas y un conjunto de fuerzas representativas de sectores obreros y medios estableció un espacio, ciertamente limitado, al sindicalismo, y consagró unas formas de comunicación política de tipo paternalista entre el Gobierno y los trabajadores organizados, que asumieron una representación que sobrepasaba a los trabajadores afiliados a los sindicatos.

La CTC fue con alternativas cambiantes la pieza clave de ese compromiso histórico hasta 1945. Ese capítulo del movimiento sindical se cerró definitivamente en un momento de expansión incontenible de la violencia. El 30 de agosto de 1949 el gobierno presentó una demanda para obtener de los tribunales la liquidación jurídica de la CTC. En el texto de la demanda el funcionario que presentaba la impugnación consignaba: "A usted, señor juez, atentamente pido se digne decretar la cancelación de la personería jurídica y disolución y liquidación inmediata de la asociación de tercer grado denominada Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) (...) representada por su secretario general, señor Ventura Puentes Vanegas."<sup>11</sup>

La sustentación de la demanda descansaba en la acusación a la CTC de intervenir en política, invocando la Ley 83 de 1931. Configuraba tal intervención la declaratoria del comité ejecutivo de la central del 12 de agosto de 1949, que condenaba la violencia auspiciada oficialmente. Con su debilitamiento extremo desapareció para sectores populares, principalmente urbanos, una referencia política y un factor de indentificación. En un régimen bipartidista la central obrera había operado como un elemento de diversificación de la sociedad civil.

Simultáneamente avanzaron la constitución y el reconocimiento del sindicalismo "apolítico" y mediatizado en su papel reivindicativo por representantes de las empresas. El 16 de junio de 1946 fue creada la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). La fundación de esa central fue posible, gracias a una múltiple coincidencia: el afán de la Iglesia por controlar el sindicalismo, el interés de los gremios por sindicatos constituidos sobre la ideología de la colaboración de clases, la ambición del Partido Conservador por contar con su propia cuota en el movimiento sindical.

Los dos puntales de la CTC son Utran, la federación de Antioquia, y FANAL, la organización de los sindicatos agrícolas. De los 29 sindicatos con que la UTC decía contar en la industria en 1947, 24 estaban en Antioquia. Por su parte, Fanal estimaba para el mismo año en 237 el número de sus organizaciones en la agricultura. Por ambos lados aparecía la gran influencia de la Iglesia Católica en la UTC.

No se puede despreciar el papel jugado por las presiones de la política de los Estados Unidos con respecto a América Latina en la posguerra tanto en la represión a la CTC, como en la protección a la UTC. Por esos años el Departamento de Estado, a través de organiza-

---

<sup>11</sup> *El Tiempo*, septiembre 1, 1949.



ciones sindicales norteamericanas, despliega una sostenida acción sobre los sindicatos en América Latina.

Los empresarios, la jerarquía eclesiástica y los Gobiernos miraron con satisfacción los resultados de su acción en materia sindical y de novimientos sociales. Sin embargo, todo ello contribuyó de manera fundamental a la extensión de la violencia. Se privaba a la sociedad de válvulas de escape, se fomentaba la intolerancia extrema, se destruían canales a través de los cuales podrían transcurrir los conflictos sociales sin el poder arrasador y destructivo que alcanzaron durante la violencia. La cobertura partidista de la violencia ocultaba el desarrollo a través de la guerra civil no declarada de otra guerra social. Con razón señala Alvaro Tirado Mejía que siendo la vida el principal derecho no se puede menospreciar el impacto que produce la violencia de otros derechos que forman parte del universo mayor de los derechos humanos: "Pero hay otros: los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etc.". Y aboga porque: "Al mismo tiempo que los sectores sindicales tengan derecho a ejercer su acción sindical, garantizada en la Constitución. Y que no sea mirada como una acción subversiva o contraproducente."

Pero la relación violencia-economía no se agota en las manifestaciones que a nivel global se han venido analizando. Existen formas, si se quiere más espontáneas, de esa relación en las cuales no se encuentra planteamiento previo. Se trata del aprovechamiento del enfrentamiento político sectario al servicio del enriquecimiento personal. Esas posibilidades se "descubren" cuando la violencia ya ha avanzado, cuando el río está revuelto aparece como promesa de una abundante pesca. Se descubre que la amenaza, el asesinato, los éxodos constituyen caminos de acumulación. En este caso la violencia precede a la economía. Establecidas las cadenas de esta relación, la expansión económica obra como estímulo de la violencia y como factor de su profundización y prolongación en el tiempo.

Para las zonas cafeteras de Caldas y Quindío, Jaime Arocha y particularmente Carlos Miguel Ortiz han documentado convincentemente la manera como se produjo una recomposición de los propietarios. Una franja compuesta por profesionales, comerciantes de las cabeceras municipales, fonderos, agregados- mayordomos pudo dominar la esfera de comercialización del café y convertirse en un decisivo eslabón de "los negocios de la violencia."<sup>12</sup>

En el Valle del Cauca, particularmente en la parte montañosa del departamento, avanzó la sustitución coercitiva de pequeños y medianos caficultores y propietarios de parcelas de cultivos de pan coger por nuevos propietarios de una ganadería lechera. Urbano Campo, quien laboriosamente ha estudiado estos procesos, los vincula con la demanda de leche proveniente de la transnacional suizo-norteamericana Borden-Nestlé, conocida como Cicolac-INPA, la establecida en Bugalagrande en 1946.<sup>13</sup>

El mismo autor establece el nexo entre los éxodos ocasionados durante la violencia en las regiones aledañas a Tuluá y la expansión de los ingenios azucareros y el establecimiento de una peculiar forma de urbanización a orillas de las haciendas del azúcar conformada por una población de exiliados, convertidos en mano de obra derrotada y barata. Llama la

<sup>12</sup> Ortiz Sarmiento, Carlos Miguel: *Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío, años cincuenta*. Cerec-Cider, Bogotá, 1985. Particularmente interesante la sexta parte: "Los negocios de la violencia o la violencia como negocio". Arocha, Jaime: *La violencia en el Quindío*. Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1980.

<sup>13</sup> Urbano, Campo. *Urbanización y violencia en el Valle*, Ediciones Armadillo, Bogotá, 1984, p. 84.

atención la expansión de la superficie del Ingenio Manuelita de 1944 a 1950. Para el primero de esos años la hacienda constaba de 5.201 fanegadas, para el segundo de 7.708 fanegadas.

Hay hechos que hacen recordar la lógica nacional. Tanto en el Quindío como en el Valle no dudan los propietarios en ahogar cualquier posibilidad de organización de los trabajadores. En el Quindío, mediante la violencia, algunos de los nuevos propietarios en trance de administradores no desdennan la utilización de los mecanismos de la violencia sectaria para burlar derechos a los trabajadores. En el Valle, el sindicalismo del dulce sólo podrá recuperarse hasta finales de los años cincuentas.

De manera un tanto fragmentaria se dispone de testimonios para los Llanos Orientales sobre la consolidación de fortunas al ritmo de la violencia. Resulta interesante constatar cómo figuras que estaban destacadas en los Llanos durante la violencia se quedan en la región después de la entrega de las guerrillas y colocan su experiencia al servicio de ganaderos que buscan limpiar de colonos sus grandes dominios. Al respecto, resultaría muy ilustrativo la biografía del coronel Román Bazurto,<sup>14</sup> uno de los militares pacificadores, fundador del DAS rural y luego convertido en ganadero.

En las regiones que habían servido de escenario a las luchas agrarias en los años treinta, los terratenientes vieron con el desencadenamiento de la violencia la posibilidad de hacer retroceder las conquistas alcanzadas por los colonos y campesinos en general. Aquí la violencia tomó la forma de revancha terrateniente, como denominó en fenómeno Pierre Gilhodés. La violencia de autoridades locales, de bandas civiles y del ejército castigaron cruelmente al campesinado de esas regiones. La organización y la experiencia política adquiridas en el partido comunista, en la UNIR de Gaitán, en el PAN de Erasmo Valencia, les sirvió a esas comunidades para arrebatar la violencia del enfrentamiento sectario liberal-conservador y convertirla en movimientos de resistencia campesina. Con desarrollos diversos ese fue el camino que siguieron comunidades agrarias en Sumapaz y oriente del Tolima, Sur del Tolima, San Vicente de Chucurí, en Santander, etc.<sup>15</sup>

Se ha argumentado por algunos autores que en la asociación violencia-economía en las regiones no se pueden identificar intereses de clases o de grupos sociales. Estaríamos simplemente ante estrategias individuales. Esa afirmación refleja las limitaciones que aún hoy presenta la investigación sobre la violencia. En efecto, si para las diversas regiones se agregan esos movimientos individuales, nos encontramos con series provistas de sentido. Seguramente en los grandes movimientos sociales son pocos los individuos que se sientan partícipes de proyectos de grupos o de clases. Objetivamente participan en ellos en la búsqueda de su interés individual. A primera vista se advierte el avance de la acumulación capitalista, la incorporación a la escena de los negocios de nuevos actores, la parcial recomposición de propietarios que alimentan formas de un capitalismo salvaje. Al respecto se lanza la observación muy razonable sobre la depresión económica sufrida por algunas regiones por efectos de la violencia. En su investigación sobre la violencia, Darío Fajardo muestra la quiebra de la caficultura de Chaparral después de la violencia. El mismo autor muestra, sin embargo, el desarrollo de la agricultura capitalista en el plan del Tolima. Es decir, no pocas veces unos fenómenos son premisa de otros. Ello se advierte solamente en el encadenamiento general.

<sup>14</sup> Estas observaciones se formulan con base en las entrevistas realizadas con algunos protagonistas de la violencia en los Llanos Orientales. Fue particularmente reveladora la entrevista con un ex cabo del ejército y al mismo tiempo ex guerrillero de los hermanos Bautista.

<sup>15</sup> Ver al respecto Medófilo Medina. "La resistencia campesina en el sur del Tolima", en *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Cerec, Bogotá, 1986, pp. 233 y ss.

## Expansión económica y violencia 1984-1988

### La economía en la segunda mitad de los años ochentas

La primera mitad del decenio de los años ochenta estuvo caracterizada en los países de América Latina, por la recesión económica. Aunque de manera menos severa que otros países, como lo evidencian los índices económicos, Colombia no fue la excepción.

Desde mediados de 1985 la economía presentó desempeños positivos que se convirtieron en franca recuperación en 1986 y 1987. Para estos años el crecimiento del PIB fue del orden del 5.1% anual. La industria manufacturera creció a un ritmo cercano al 7%. En este crecimiento la más alta participación la mostraron las ramas de bienes intermedios y de capital.

Desde mediados de 1985 se ha mantenido un flujo consistente de capitales hacia la industria. Entre comienzos de 1986 y los primeros meses de 1987 los registros aprobados para importaciones de bienes de capital aumentaron en un 25% en dólares. En varias ramas de la industria de transformación se registraron milagros. Empresas que se encontraban al borde de la quiebra o que habían entrado en proceso de concordato no sólo superaron la situación crítica, sino que pudieron mostrar balances muy favorables en el último tiempo. Entre las más importantes podría mencionarse a Paz del Río, Fabricato, Coltejer, Avianca, el ingenio de Río Paila, etc. Llama la atención el caso de la IBM. Mientras su casa matriz atravesaba uno de los peores años, la filial colombiana alcanzó utilidades de 3.510 millones de pesos.<sup>16</sup>

Como sus antecesores en la época de la violencia, Fabio Echeverry Correa, presidente de la ANDI, quizá de manera menos esquizoide, sentenciaba a comienzos de 1987: "La economía va bien, pero al país le va mal". En un período de nueva violencia, ésta había adquirido las formas enrarecidas de la guerra sucia.

Otras ramas de la economía mostraban un comportamiento acorde con las tendencias características de la industria. Así, el crecimiento del sector agropecuario se estimó en 1986 en 2.1% y en 1987 en 4.1%, que según Fedesarrollo representa una tasa superior a todas las observadas en el decenio de los ochentas. Si bien la agricultura aún depende en alto grado de las alternativas de la producción cafetera, es notable el debilitamiento de esa dependencia por el dinamismo de la producción agrícola no cafetera, que creció en un 3.6%. Después de oscilaciones de los voceros de los gremios, no ha mostrado la situación catastrófica con que se le suele pintar.

En la producción minera se destaca el ascenso de los combustibles que habría alcanzado en 1987 el nivel más alto de toda la historia. El incremento de la producción de petróleo en 1987 fue superior en más del 30% a la del año anterior. El descenso en los precios internacionales del carbón se vio con ventaja compensado por el aumento de la producción que fue más del 80% en 1987 en relación con año anterior.

---

<sup>16</sup> Esta breve reseña recoge datos de las siguientes publicaciones: Fedesarrollo, *Coyuntura económica*, Vol. XVII, núm. 3, septiembre de 1987, y Vol. XVIII, núm. 4, diciembre de 1987, aparte de los informes titulados "Actividad económica general", se estudió el trabajo de Moshe Syrkin, en el núm. 4, de diciembre de 1987, de la misma publicación. También se consultó "Informe especial. Las cien empresas más grandes de Colombia", *Semana*, 26 de mayo a 1 de junio de 1987; también *Semana* del 27 de enero al 2 de febrero de 1987.

Con respecto al sector externo y más allá de la consideración detallada de las cantidades y los precios de los productos colombianos para la exportación, hay un fenómeno de bulto: los cambiantes ritmos en los precios del café están siendo crecientemente reducidos en cuanto al impacto en el conjunto de la economía. Al menos tres factores obran en esa dirección: el crecimiento de las exportaciones y precios del petróleo, el incremento del volumen del carbón exportado, el consistente comportamiento de las exportaciones menores y el ingreso de divisas procedentes de la economía ilegal. Dicho fenómeno tiene una significación cuyas consecuencias en la transformación de la economía colombiana hasta ahora empiezan a valorarse. Naturalmente, estas tendencias chocan con el impacto negativo de los problemas del financiamiento externo.

### Dos momentos económicos: tasas de crecimiento\*

Período	PIB Total	PIB industrial	PIB Agricultura	Formación Bruta de Capital	Exportaciones
1980-1984	2.1	0.9	1.6	1.6	1.4
1986-1989	4.5	4.4	4.0	4.0	3.4

i) Pesos constantes de 1975.

\* Fuente: Cuentas Nacionales, DANE.

La etapa de reactivación económica que se inició a finales de 1985 se produjo después de un período de aguda contracción (1980-1984) que ha sido calificada como la "peor crisis de la postguerra". Por otro lado el país se había recuperado del colapso del sector financiero. Esas circunstancias de orden objetivo pueden calificar el tipo de expectativas de los empresarios y hombres de negocios al empezar la fase de reactivación. Sin embargo, cualquiera podría esperar que la expansión que, además, se acompañó de síntomas de saneamiento económico (el déficit del gobierno central que había sido del 3.6% en el período 1980-1984 descendió al 2.1% para 1985-1989) crearía condiciones más favorables para la paz y la estabilidad política. Como bien se sabe, ello no fue así. Ahora como a finales de los años 40 la aventura económica se hacía compatible con el desboque de la violencia.

Naturalmente las tendencias que muestra la economía durante la segunda mitad de los ochentas no pueden verse en función exclusiva del libre juego de las fuerzas económicas. Estas fueron sometidas a un tratamiento de choque en 1984 y 1985. El gobierno de Belisario Betancur desarrolló una política económica rígidamente ortodoxa. En este campo el caso colombiano mostró peculiaridades notables: 1o. El "ajuste" produjo resultados inmediatos y 2o. no condujo a los estallidos sociales que por dicha causa se produjeron en otros países. Resulta pertinente al respecto recordar el levantamiento popular que sacudió a Caracas y a otras ciudades venezolanas del 27 de febrero al 3 de marzo de 1989 y que constituyó una respuesta a la política realizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien el día de su posesión había bosquejado los contenidos de lo que él llamó en su discurso inaugural "un proceso doloroso de saneamiento". Igualmente las ciudades de Rosario y Buenos Aires en Argentina sufrieron una gran conmoción en los días finales de mayo y los primeros de junio

de 1989, cuando turbas enfurecidas contestaron violentamente en las calles a la política económica.

En Colombia la violencia que al nivel de lo fenoménico suele ser aprehendida como una "guerra de todos contra todos" juega un papel de mimetización y dislocación del conflicto social, el cual se funde en las corrientes de una guerra sin referentes sociales claramente identificables. El ajuste colombiano produjo resultados virtualmente explosivos. El crecimiento de los salarios industriales incluyendo las prestaciones sociales fue solamente de 0.7% para el período 1984-1989, al paso que en el lapso anterior: 1982-1984 ese crecimiento había sido del 6.1%. Por otro lado, la tasa de desempleo para el período 1985-1989 fue del 12%. Simultáneamente se expandió la informalidad en el mercado laboral urbano. Ella pasó del 52% en los comienzos del descenso al 56% para 1988.<sup>17</sup> Es conocido cómo el ajuste afectó especialmente la situación material de empleados públicos y más globalmente de las capas medias. Por diversas razones es en sectores como éstos en los cuales resulta más difícil la promoción de las reivindicaciones propias, en una atmósfera de temor ocasionado por el terrorismo y la violencia. En principio gente de estos mismos sectores es comprometida en una violencia que por los instrumentos técnicos con los cuales opera tanto en la ciudad como en el campo, demanda cierto nivel de pericia y calificación.

### Violencia y violación de derechos humanos en los años ochentas

No se pretende aquí adelantar un análisis de conjunto sobre la violencia en su etapa más contemporánea. Ello no figura en los objetivos del presente trabajo, que busca más bien identificar puentes, puntos de intersección entre el recrudecimiento de la "violencia endémica" y los hechos y procesos económicos. Por ello se toma, en cierto modo, la violencia como un hecho dado. Se destacan solamente algunos momentos relevantes para la línea de argumentación que se viene desarrollando.

Las cifras sobre muertos por motivos políticos, torturas, desapariciones, el número de abatidos en las masacres y las víctimas de los enfrentamientos armados entre fuerza pública y guerrillas son muy diversas, según las fuentes de donde provienen. Las estadísticas elaboradas no son claras. Aquí se reproducen, si se quiere, las cifras más convencionales. Según el Comité Permanente de Derechos Humanos, en 1985 fueron asesinadas 539 personas por razones políticas. Por estas mismas razones, Amnistía Internacional estimó en 1.200 el número de asesinatos por escuadrones de la muerte. La misma organización aludió a más de 1.000 muertos para 1987.<sup>18</sup> Por su parte, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, de origen religioso, estimó que solamente para el primer trimestre de 1988 el número de asesinatos políticos ascendía a 230 y a 503 los "asesinatos sospechosos", es decir, aquellos en que se presumían razones políticas. Es decir, 733 muertos.<sup>19</sup>

El Cinep, englobando el tipo de muertes del párrafo anterior y adicionando los muertos en combate entre la fuerza pública y las guerrillas, presentó los siguientes promedios.

<sup>17</sup> *La deuda social en Colombia*. Prealc, 1990.

<sup>18</sup> Amnistía Internacional. *Informe 1987*, enero-diciembre de 1986. Colombia. Una crisis de derechos humanos. Documento de Amnistía Internacional, publicado en abril de 1988, Publicaciones Amnistía Internacional.

<sup>19</sup> "Justicia y Paz", *Boletín Informativo*, vol. I, núm. 1, enero-marzo de 1988, pág. 59.

---

## Asesinatos fuera de combate y muertos en combate\*

---

### Promedio mensual

---

Gobierno de Turbay Ayala _____	10.4%
Gobierno de Betancur _____	61.5%
Gobierno de Barco _____	196.6%

(Datos cinco primeros meses)

---

\* "Qué pasó". *Coyuntura*, trimestral, año 4, núm. 19, octubre 1987, p. 46.

---

Las cifras "oficiales" presentadas por el Ejército daban un total de 1.092 muertos entre enero y agosto de 1988 en enfrentamientos con la guerrilla.<sup>20</sup>

Las cifras anteriores, con todo lo vagas que sean, muestran la expansión de la violencia. Ellas, en su inmediatez cuantitativa, no expresan sino muy débilmente el clima creado por la violencia. Los magnicidios y las masacres, y sobre todo la impunidad de que están rodeados, crean un clima de asombro y desmoralización colectivos imposible de cuantificar. Por otro lado, la violencia guerrillera, la senderización de algunos de sus movimientos completan el cuadro de conflictos violentos.

No obstante descripciones más o menos impresionistas de la violencia de los años ochentas en las cuales se destacan las calificaciones de "guerra de todos contra todos", del carácter multiforme de "las violencias" y de la apelación a imágenes de tipo apocalíptico en la violencia actual se impone su carácter sistemático y planificado. Ello es así porque más allá de los intereses que la alimentan, la violencia opera con instrumentos técnicos-militares: instituciones armadas del Estado, grupos paramilitares, guerrillas, etc. Se diría que lo espontáneo es apreciablemente menor que en la hecatombe de mediados de siglo.

Ese carácter sistemático de la violencia en su etapa actual se advierte también en los blancos preferidos dejando de lado la confrontación claramente militar de fuerza pública y guerrillas, la composición social de los sectores víctimas de la violencia no sustentan la idea de "guerra de todos contra todos". Amnistía Internacional describía así el universo de las víctimas en su informe que cubre el año 1986. "Las víctimas fueron decenas de estudiantes, profesores, sindicalistas y simpatizantes de partidos de oposición y de organización cívicas, así como también supuestos delincuentes comunes, vagabundos, homosexuales y ocupantes ilegales de terrenos."<sup>21</sup>

En ese conjunto se advierten tres grandes componentes de la violencia contemporánea: la generada por la intolerancia política que ubica su objetivo entre intelectuales y corrientes políticas no bipartidistas; el integrismo de sabor fascista que administra la violencia como eutanasia; y la violencia como negocio que ataca a sindicalistas, a colonos y a ocupantes de tierras. En el ámbito de violencia obra el narcotráfico con su propia maquinaria de violencia en virtuales alianzas con empresarios, hacendados y ganaderos. En el telón de fondo

---

<sup>20</sup> *El Tiempo*, Bogotá, 16 de diciembre de 1988.

<sup>21</sup> Amnistía Internacional: *Informe 1987*, pág. 1.

aparecen instancias o personas de las Fuerzas Armadas y particularmente de sus servicios secretos.

Existen regiones donde se encuentran los más diversos conflictos. Tales es el caso del Magdalena Medio, el Meta y Caquetá, los Territorios Nacionales. Se quiere presentar algunos rasgos de la violencia en la región de Urabá, asiento de un capitalismo ligado al sector externo. La producción del banano aúna al mismo tiempo la doble característica de renglón de superganancias y de explotación primitiva de la mano de obra. Colombia se ha constituido en los últimos años en el tercer productor mundial de banano. La producción de Urabá juega un papel de primer orden en la exportación.

Aunque en la región la producción del banano se había iniciado en 1952, solamente hasta abril de 1987 se firma un acuerdo laboral en que toman parte el Ministerio de Trabajo, Augura, la organización de los empresarios, y los voceros de los sindicatos Sintagro y Sintrabanano, en representación de 32.200 trabajadores.<sup>22</sup> Estos sindicatos están afiliados a la recientemente creada central sindical: CUT. En el proceso de negociación del pliego fueron asesinados 17 trabajadores. El total de muertos por la violencia en ese período fue de más de 100 en la región. En la medida en que el logrado en abril fue un convenio marco, las negociaciones debieron continuar para las 267 fincas. Hasta mediados de año se produjeron huelgas. En general, la violencia continuó con intensidad. En su informe de 1988 Amnistía Internacional consignaba: "Se cree que en 1987 más de 200 personas fueron asesinadas en la región bananera de Urabá".<sup>23</sup>

Resulta muy sintomática la visión que sobre Urabá ofrecen sectores nacionales. Los empresarios tienden a identificar la violencia con la acción de los sindicatos y llaman a rodear a un renglón económico que se muestra muy promisorio. Las fuerzas Armadas no aciertan a ver tras el movimiento gremial otra cosa que la presión subversiva de la guerrilla. El diario bogotano *La República*, vocero de un sector del conservatismo, comentaba en la edición de 8 de julio de 1987: "Es pernicioso que cada una de las 267 fincas en Urabá tenga su sindicato. Sintagro atenta contra la economía del país al promover las huelgas. Es necesario entonces cambiar de frente de trabajo y evitar que los bananeros nacionales acorralados por un sindicalismo comunista tengan que abandonar los cultivos". Por su parte, el obispo Héctor Rueda declaraba para la prensa, el 30 de junio de 1987, que los paros del banano tenían orientación subversiva.

Naturalmente no se desconoce la complejidad de un proceso de negociación en una zona como la de Urabá, donde, además, tienen incidencia las organizaciones guerrilleras.

Los acuerdos entre empresarios y trabajadores son frágiles. El deterioro de la situación política en la región ha continuado y la violencia no ha amainado. No ha cesado el asesinato de trabajadores, uno de los cuales tuvo lugar el 4 de marzo de 1988 cuando un grupo paramilitar sacó de la casa y fusiló a 26 trabajadores bananeros, miembros de los sindicatos.

Otra rama en que los trabajadores han sido castigados con una cruel violencia ha sido la de los cementos, que ameritaría también algunas referencias detalladas. Sólo para 1986

---

<sup>22</sup> Una coherente descripción de los conflictos en la zona bananera se encuentra en el trabajo de Julián Delgadillo: *La violencia en Urabá*. Ponencia presentada al VI Congreso de Historia de Colombia. Ibagué, noviembre de 1987. A ese trabajo se remite la información que aquí se trae a propósito de Urabá.

<sup>23</sup> Amnistía Internacional: *Informe 1988*, p. 14.

fueron asesinados 12 dirigentes y activistas de la industria del cemento. Los grupos paramilitares se han ensañado especialmente contra los trabajadores de la empresa Cementos Nare en Puerto Nare, Antioquia. De la misma manera figuran en la financiación de episodios de la guerra sucia empresas petroleras. Aquí la relación de economía y violencia es mediada por el control monopólico de mercados regionales.

### Las mediaciones entre economía y violencia

En pasaje precedente de este trabajo se aludió a ciertas potencialidades de violencia inherentes a la manera como transcurre el desarrollo del capitalismo en Colombia. Se acotó también que tales potencialidades se transforman en abiertos factores de violencia en contacto con unas realidades políticas, con unas tradiciones culturales, con un cuadro de correlación de fuerzas. En este capítulo se aborda el problema de las relaciones obrero-patronales y más globalmente del lugar del sindicalismo en relación con la pareja de categorías: expansión económica-violencia. Se sabe que al lado de ésta existen otras mediaciones políticas que se bosquejarán más adelante.

Altos ritmos de acumulación de capital despiertan expectativas extraordinarias de ganancia. Esa tendencia, en cierto modo normal en cualquier empresario, se convierte en Colombia en un poderoso factor de violencia en la medida en que las reglas de juego sobre las cuales descansan las relaciones obrero-patronales están permanentemente en tela de juicio. Hay aspectos de la legislación laboral que son sometidos a procesos de revisión permanente. Pareciera que no hubiera un terreno firme en materia de leyes sobre el trabajo y que casi todo está en discusión. De igual manera no existen garantías reales para el cumplimiento de las normas laborales y de las cláusulas de las convenciones colectivas. Al comparar los motivos que han llevado a los trabajadores a la huelga, se advierte que en los años ochentas se incrementaron extraordinariamente las huelgas no por nuevas reivindicaciones, sino contra la violación de normas laborales o de puntos pactados en los pliegos. A este motivo respondieron entre 1981 y 1984 el 31% de las huelgas en la manufactura, el 70% en los servicios (excluyendo el magisterio), el 80% en el transporte. Para esos mismos renglones las huelgas, por el mismo motivo para el período 1971-1980, habían sido de 18%, 51%, respectivamente.<sup>24</sup>

Los informes de las visitas de inspección y vigilancia realizadas por el Ministerio de Trabajo entre 1982 y 1985 y que cubrieron a 12.451 empresas consignaban que escasamente el 8,4% de esas empresas estaban cumpliendo cabalmente las disposiciones legales y que el 91% lo incumplía en un promedio de 3.85% las normas cada una.<sup>25</sup>

Por otra parte, la legitimidad misma del sindicalismo se pone siempre en duda. Su espacio tiende a reducirse. La creación de nuevos sindicatos está rodeada de una numerosa reglamentación al tiempo que se excluye de la posibilidad de organización gremial a sectores muy numerosos de los trabajadores. Así, de 915.307 trabajadores que laboran en entidades estatales, solamente el 17% tiene derecho a suscribir convención colectiva. La prohibición de la huelga cubre un número aún mayor de trabajadores por cuanto quienes trabajan en actividades consideradas de "servicios públicos" están excluidos de ese derecho. Para grandes contingentes de trabajadores los derechos son discrecionales. En ello no

<sup>24</sup> Londoño Botero, Rocío: *Los sindicatos y la política laboral en Colombia*, Departamento de Sociología, Universidad Nacional, Bogotá, 1988 (trabajo aún inédito).

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 50.



influye el hecho de que el país haya firmado los acuerdos de la OIT sobre derechos sindicales.

Frente a huelgas en ramas importantes: petróleo, banano, empresas industriales, los puertos, se forma con extraordinaria facilidad un coro de condenas que resultan sospechosamente unánime: editoriales de la gran prensa, comentarios de los expresidentes, advertencias de los obispos y, por supuesto, desconocimiento de las verdaderas causas de los conflictos. Los militares, los paramilitares, encuentran un camino despejado para proceder cuando el coro, en todos los tonos, ha administrado al movimiento huelguístico el calificativo de "subversivo". Ese código en un país como Colombia, donde opera un diversificado movimiento guerrillero, ubica la huelga, la protesta campesina en el ámbito donde opera la lógica amigo-enemigo.

Este fenómeno no sólo significa el desconocimiento de los derechos humanos, sino la criminalización de su ejercicio. Fácilmente, el ciudadano que se siente participando en un conflicto dentro de las normas del derecho se ve precipitado al campo de la subversión.

Los empresarios y funcionarios oficiales adicionan a las condenas de tipo ideológico la argumentación de orden económico: la estabilidad de los trabajadores se presenta como un obstáculo para la reactivación económica. En consecuencia, abogan por la ampliación del número de trabajadores temporales y los contratos a término fijo.

La intolerancia que se muestra en algunas ramas frente a la organización sindical y la incorporación de altas dosis de barbarie en las relaciones obrero-patronales en algunas regiones tienen su correlato en el plano nacional. En 1986, en función de acuerdos entre corrientes sindicales de orientación ideológica y política diferentes, fue creada la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El corto período de vida que hasta ahora tiene la CUT ha estado caracterizado por una cruda persecución. En los tres primeros meses de vida del 15 de noviembre de 1986 a enero de 1987 la central sindical sufrió el asesinato de 70 de sus miembros. Para el primer año de su existencia la CUT contabilizó 116 dirigentes y miembros asesinados por escuadrones de la muerte y seis desaparecidos.<sup>26</sup>

Esta marca de horror sólo es superada por las víctimas de la Unión Patriótica, que contabiliza hasta 1989 alrededor de 1.000 dirigentes y miembros asesinados desde su fundación a finales de 1985.

Para los años ochentas es preciso incorporar como factor nuevo en relación con los años cuarentas y cincuentas la influencia de la producción de estupefacientes y del narcotráfico, tanto en el proceso económico como en la violencia. No se cuenta con una cuantificación decididamente confiable sobre el peso de la producción y comercio de narcóticos en la economía colombiana. Los estimativos provienen de estadísticas gubernamentales, de medios oficiales de los Estados Unidos, de fuentes periodísticas y finalmente de estudios académicos.

Roberto Junguito Bonnet y Carlos Caballero Argáez estudiaron la incidencia de la economía ilegal (exportaciones de contrabando de productos tradicionales y producción, comercio y elaboración de marihuana y cocaína). A partir de las expectativas sobre la significación de diversos factores de la economía en países con nivel similar al de Colombia

---

<sup>26</sup> Amnistía Internacional: *Informe 1988*, p. 17.

llegaron a la conclusión sobre el subregistro de las magnitudes del ahorro interno y de las exportaciones. Atribuyeron esa subvaloración a la incapacidad de la estadística convencional para captar el impacto de la "otra economía". Contrastando diversas informaciones, estimaron para el año 1976 en 143 millones de dólares los ingresos por marihuana y en 140 millones los correspondientes a la cocaína. La elaboración de la pasta de esta última apenas tomaba impulso.<sup>27</sup> El estudio citado resulta útil hoy, ante todo por la metodología diseñada. Diez años después las cifras absolutas y las proporciones con respecto al Producto Interno Bruto son obviamente diferentes a las captadas en dicho estudio. En un número monográfico de la revista *Economía Colombiana*, diversos autores presentan estimaciones sobre el peso específico del narcotráfico en el PIB que van desde el 2.36% hasta el 8% para los años ochenta.<sup>28</sup> Al tiempo se estima que la economía del narcotráfico provee unos 250.000 empleos lo cual representa el 3% de la fuerza laboral colombiana.

El contralor Rodolfo González García vinculaba, en declaraciones que concedió a la prensa en octubre de 1987, la reactivación económica a la influencia de dineros calientes invertidos especialmente en vivienda y comercio. El auge económico que, como arriba se señaló, comenzó a mediados de 1985, difícilmente podría examinarse en función exclusiva de la suerte del café que, indudablemente, ha tenido algunos buenos momentos en los últimos años. Por otra parte, se han presentado dificultades en los flujos de endeudamientos de largo plazo del sector oficial. Así, por lo menos, los registraba Fedesarrollo para 1987.<sup>29</sup> Es decir, la reactivación económica no podría explicarse únicamente por el impacto del café ni podría examinarse en función del azaroso proceso del endeudamiento externo. Seguramente tiene fundamento la afirmación de Kalmanovitz, según la cual la producción y distribución de narcóticos se ha convertido en la última década en la "fundamental avenida de acumulación" de la economía colombiana.<sup>30</sup>

Para los años ochentas no puede adecuadamente establecerse la relación entre la producción y comercialización de narcóticos y la economía formal en los términos de la "otra economía". Se ha establecido un sistema de vasos comunicantes y una serie de zonas comunes dentro de las cuales resulta imposible establecer fronteras. Coincidiendo con la bonanza marimbera avanzó la expansión sin precedentes del sector financiero en la economía colombiana. Al amparo de una legislación inspirada en enfoques neoliberales florecieron formas legales e ilegales de especulación financiera. Se diseñaron mecanismos flexibles y procedimientos expeditos para atraer recursos líquidos del exterior. La alta rentabilidad y la naturaleza especulativa atrajo el dinero subterráneo al sector financiero, cuya expansión y desborde no son ajenos a esa circunstancia. Al respecto, escribía Jorge Child a comienzos de los años ochentas: "La unión o enlace de la economía convencional con la economía clandestina se produce en el circuito financiero, y de ahí que sea este sector el que, a partir de 1973, haya registrado los más altos índices de crecimiento y de rentabilidad en el conjunto de la economía colombiana."

El campo por excelencia de colocación de recursos de procedencia ilegal estuvo tempranamente asociado al mercado de tierras rurales y urbanas, a la compra de caballos de paso, a la ganadería. Para finales de los años ochenta se estima que los narcotraficantes poseen

<sup>27</sup> Junguito Bonnet, Roberto y Caballero Argáez, Roberto. "La otra economía", en *Coyuntura Económica*, Fedesarrollo, diciembre de 1988.

<sup>28</sup> *Economía Colombiana*, Revista de la Contraloría General de la República, Bogotá, febrero y marzo de 1990.

<sup>29</sup> Ver *Coyuntura Económica*, vol. XVII, núm. 4, diciembre de 1987, p. 6.

<sup>30</sup> Kalmanovitz, Salomón. "Economía de la violencia", en *Revista Foro*, núm. 6, junio de 1988, p. 13.

cerca de un millón de hectáreas o sea 4.3% del total de las tierras roturadas o dedicadas a pastos.<sup>31</sup>

Paulatinamente las inversiones se interesaron en otros sectores como la compra-venta de carros, la importación de vehículos, el montaje de concesionarias, el transporte, etc.

También los dineros de la economía ilegal buscaron esferas de inversión, especialmente relacionadas con la opinión pública: los medios de comunicación (particularmente la radio), el fútbol.

Finalmente, la agroindustria y la industria no han permanecido al margen de las corrientes de dineros calientes. Pasó ya el tiempo cuando el lavado de dólares buscaba como objetivo las esferas especulativas y no las productivas.

Con esta expansión, los dineros de la economía ilegal han pasado a girar en la órbita de la contradicción capital-trabajo. Por ello no es posible pensar en el narcotráfico como realidad marginal que ocupe un espacio claramente diferenciado del conjunto de la economía colombiana.

Por otra parte, múltiples entradas legales incorporan los dineros provenientes del comercio de drogas. La "ventanilla siniestra" del Banco de la República, las amnistías tributarias, los depósitos de colombianos en oficinas de bancos colombianos en el exterior, la admisión de garantías en el exterior contra créditos en pesos y las tradicionales operaciones de sobrefacturación de exportaciones y subfacturación de importaciones. Frente a estas realidades los medios de comunicación, voceros de los partidos y representantes del gobierno han alimentado una doble moral que consiste en condenar severamente el narcotráfico en el discurso público y al tiempo cerrar los ojos con respecto a su penetración en la economía legal. Esa posición está determinada en medida no despreciable por la presión del gobierno de los Estados Unidos. Los gobiernos de este país han subordinado su política con respecto al narcotráfico a las necesidades de sus intereses geopolíticos.

Por ello no resulta útil examinar estos fenómenos con un rasero moralista. Conviene más bien someter a análisis la actitud política frente al fenómeno. Mientras en este plano no se adopten actitudes realistas, la brecha entre el tratamiento económico y político de la producción y comercio de drogas en Colombia seguirá aportando elementos muy graves de violencia.

Pero lo más importante de estudiar, desde el punto de vista del presente trabajo, es otro aspecto derivado de la penetración de la economía formal por la ilegal: paralelamente avanzan unos valores y se niegan otros. La búsqueda del lucro a cualquier precio, la audacia en los métodos, el terror como medio para disuadir o eliminar al rival, van contaminando al conjunto de las relaciones económicas, las contradicciones obrero-patronales, la atmósfera social dentro de la cual transcurre el proceso de acumulación. Por ello no es afortunada la identificación de un sector gangsteril del capital, como entidad especialmente ubicable. Más bien se trata de la amplia utilización de métodos gangsteriles por parte de los capitalistas.

Las coincidencias son múltiples: el narcotráfico aporta una experiencia y una estructura del terror emanadas del ejercicio mismo de una economía clandestina amén de su propio

---

<sup>31</sup> Kalmanovitz, Salomón, "La Economía del narcotráfico en Colombia", en *Economía Colombiana*, febrero y marzo de 1990.

interés económico cuando ha ascendido a las zonas “limpias” de la inversión. Hacendados y ganaderos o bien venden propiedades a narcotraficantes, ávidos de adquirirlas, o ponen su suerte en manos de quienes no muestran reticencias en la utilización de cualquier medio para precaverse contra la fundación de un sindicato agrario o contra eventuales invasores.

A ciertos sectores empresariales, aquellos que en otra época, a finales de los años cincuentas, alimentaron “la mano negra”, no les val mal la violencia antisindical. Para ellos las conquistas laborales nunca alcanzan el rango de “materia juzgada” siempre están bajo la tentación y al acecho de posibles reversas, logrables más fácilmente en la atmósfera adversa que crean para el desarrollo del sindicalismo, el terror y la guerra sucia. Ante el fácil expediente de atribuir la mayor parte de las manifestaciones de la violencia de los años ochenta unilateralmente a los narcotraficantes es preciso reexaminar las continuidades y discontinuidades de la violencia en Colombia. Sin la gravitación de esas realidades históricas el impacto del narcotráfico hubiera sido mucho menos violento y desarticulador.

Esas inercias del conflicto se alimentan y reproducen en otros ámbitos: personas e instancias de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la guerra contra la guerrilla han sido atrapadas por la psicología de la contrainsurgencia, la cual conduce en algunos casos a justificar la guerra sucia como medio de combatir al enemigo real y/o supuesto. El anticomunismo se constituyó en uno de los valores del espíritu de cuerpo de los militares colombianos por dos razones: la primera de ellas tiene que ver con el momento de reorganización del ejército actual en Colombia, la cual se produjo entre 1949 y 1952. Esa coyuntura está asociada a la violencia y particularmente a la guerra fría a la cual se vincularon de manera directa los militares colombianos mediante su participación al lado del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Corea. La segunda está asociada al proceso de la guerra interna en la cual las Fuerzas Armadas han reconocido un enemigo permanente en unas guerrillas que se han acogido de manera explícita a ideologías de izquierda y que en el caso de las FARC y el EPL han mantenido vínculos históricos con el Partido Comunista y el Partido Comunista M.L., respectivamente.

Hoy por hoy, la violencia, la violación masiva de los derechos humanos están inscritas en las coordenadas básicas de desarrollo económico, social y político del país. En estas últimas se vive una etapa de acumulación que se evoca en los métodos de la era de la acumulación primaria.

## **Violencia rural – violencia urbana**

Al margen del tema principal del presente ensayo –la relación violencia, economía, derechos humanos– se toma la confluencia de otros fenómenos que subrayan la necesidad de un modelo explicativo global de la violencia.

La relación entre los dos términos del binomio rural-urbano está referida únicamente a la violencia política. La distinción sólo tiene validez dentro de términos muy precisos.

Uno de los factores que más poderosamente ha alimentado la violencia en el ámbito rural ha sido el aplazamiento histórico de una reforma agraria que hubiera incluido un fuerte componente distributivo.

La abolición de los resguardos y la supresión de bienes de manos muertas a mediados del siglo XIX, la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, que han sido la cristalización de las

políticas agrarias más importantes, han contribuido a modernizar las relaciones de trabajo, a tecnificar la actividad agropecuaria a crear la infraestructura, pero han dejado en pie la concentración de la propiedad territorial, y con ella una numerosa población agraria con muy poca tierra o desprovista de ella. Esta población tampoco ha podido ser absorbida por el sector moderno de la agricultura y la ganadería. El campesinado como clase ha mostrado en Colombia una tenacidad sorprendente, ha sobrevivido a las diferentes etapas de modernización y mantiene un peso del 50% de la fuerza laboral agraria.<sup>32</sup>

El cuadro anterior se prolonga a través de un flujo permanente hacia la frontera agraria. Después de una fase pacífica de la colonización sobreviene un período de conflicto cuando terratenientes y las más de las veces ganaderos avanzan con métodos violentos sobre el espacio que asimilaban los colonos. Escenarios de esa historia interminable han sido la región del Tequendama en Cundinamarca, Sumapaz en el mismo departamento, oriente del Tolima y sur del mismo departamento, norte de Cundinamarca, Magdalena Medio, vasta regiones del Meta y del Caquetá,<sup>33</sup> que a su vez apenas continuaron otros frentes abiertos en el siglo XIX. Si bien se mira, los ciclos históricos de la colonización tienden a coincidir con etapas de la violencia. Cada ciclo tiene sus propias fases de iniciación, expansión y conflicto.

En momentos diversos estas regiones han sido epicentros de confrontación armada. En el último decenio, en la mayoría de ellas, han operado frentes guerrilleros y guarniciones de las diversas brigadas del ejército colombiano. Al tiempo grupos paramilitares financiados por ganaderos y terratenientes sostienen grupos paramilitares y bandas de sicarios.

Los procesos colonizadores de los años setentas y ochentas se ha encontrado con las inversiones del narcotráfico. Así a la violencia tradicional asociada a la colonización se han adicionado los sistemas de alianzas y oposiciones que ha generado el narcotráfico en el campo. Según Mauricio Romero, las compras de tierras obedecerían además del interés representado en la inversión misma a los objetivos del control de espacios y de conformación de la infraestructura que demanda la producción y comercialización de los narcóticos. "Desde ese punto de vista, no sería una ficción el corredor de propiedades establecido por el narcotráfico entre las costas de Urabá y Córdoba, y las selvas de la Orinoquia y la Amazonia."<sup>34</sup>

Sin embargo, las contradicciones originadas en la tenencia de la tierra y, particularmente, el conflicto histórico en la zonas de colonización no alimentarían por sí solos la violencia en las variadas manifestaciones con que ella se presenta actualmente en el campo.

Si, por ejemplo, se examina la composición social de las guerrillas, se advierte la presencia mayoritaria de gente en su mayoría joven procedente de la ciudad. Aun en el caso de las FARC, cuyo origen fue predominantemente rural, hoy se presenta una composición mixta: rural-urbana. El origen de los movimientos armados surgidos después del año sesenta fue urbano. El ELN constituyó su primer destacamiento en 1964 a partir de un grupo de universitarios. El EPL dio origen a su primer frente armado en el nordeste antioqueño en 1967, mediante el acuerdo de activistas políticos maoístas venidos de la ciudad. El M-19 se

<sup>32</sup> Ocampo, José Antonio (editor): *Op. cit.*, p. 290.

<sup>33</sup> Catherine Le Grand ha estudiado con profundidad los procesos de colonización en Colombia. Una visión de síntesis sobre sus trabajos puede formarse leyendo "Los antecedentes agrarios de la violencia: El conflicto social en la frontera colombiana, 1950- 1940", en *Pasado y presente de la Violencia*, *op. cit.*, pp. 87-111.

<sup>34</sup> Romero, Mauricio, Córdoba: Latifundio y narcotráfico en *Análisis 3*, Documentos ocasionales No. 56, Cinep, Bogotá, noviembre de 1989.

fundó como movimiento de guerrilla urbana, condición que mantuvo hasta comienzos de los años ochentas cuando buscó hacerse fuerte en el campo, luego del desembarco en Nariño y Chocó.

En la violencia de los años cuarentas y cincuentas, en algunas regiones, la resistencia contra la policía y el ejército superó el horizonte inmediato del enfrentamiento sectario liberal-conservador para tomar rasgos de guerra campesina. El bandidismo político, los núcleos de autodefensa y formas rudimentarias de asociación armada prolongaron la experiencia anterior en el período siguiente. En el campo, a partir de regiones específicas, se conformó una especie de matriz de resistencia armada que conservó sus nichos ecológicos iniciales a partir de los cuales ha tenido notable expansión.

Esa continuidad histórica ha ejercido irresistible fascinación sobre sectores de la juventud urbana. A comienzos de los años sesentas, con desigual fortuna, estudiantes radicalizados buscaron en ciertos bandidos políticos la experiencia militar, quizá hasta la legitimación popular en la iniciación de un nuevo capítulo de resistencia armada. El M-19, una guerrilla tan imaginativa por sus métodos de acción, como urbana por su composición y objetivos, se enfrentó en un momento dado al dilema de ser en el campo, o no ser en términos militares. Respondió en favor del primer término del dilema.

La evolución del movimiento guerrillero ha contribuido de manera notable a la expansión de la violencia. Hace años el historiador Eric Hobsbawn se preguntaba por la magnitud del grupo guerrillero que una comunidad campesina puede sostener. Hoy ese interrogante carecería de sentido. Las organizaciones armadas más importantes tienen metas estratégicas explícitas. Dichos objetivos pueden asociarse o no a los intereses de colonos y campesinos concretos.

Por otro lado, el hecho de convivir en zonas comunes con el narcotráfico terminó con una penetración de los ideales políticos por otros valores en los cuales medios y fines tienden a disociarse. Así, por ejemplo, la idea de que los recursos económicos pueden aparentemente resolverlo todo: provisión de armas, labores de inteligencia, reclutamiento de hombres, debilitan aquel viejo oxíoma de que para el guerrillero las masas son como el agua para el pez. La autonomización de algunas formaciones guerrilleras de sus bases sociales originarias o su encuentro puramente ideal con ellas en las formulaciones estratégicas, han alejado cada vez más a la insurgencia armada de las posibilidades de influir positivamente en un proceso de cambios democráticos en Colombia.

Así las cosas, se puede concluir, con respecto a este punto, que si bien se perciben problemas típicamente agrarios que alimentan la violencia de izquierda, ellos no explican suficientemente su continuidad y expansión. Las exclusiones inherentes al sistema político colombiano, las incertidumbres de la juventud frente a su rol en el intercambio de las actividades sociales y seguramente en alguna medida la utopía heroica constituyen la segunda vertiente de explicaciones.

Por otro lado, la violencia ejercida o patrocinada en el campo por los detentadores de la gran propiedad se nutre también de ingredientes urbanos en el plano técnico, por las formas del reclutamiento de sicarios y miembros de grupos paramilitares. Todo lo anterior muestra la significación muy relativa de la disección de la violencia en urbana y rural.

## Violencia y frustración política

Esta última relación que se aborda en este ensayo no se enfoca en general, sino desde la perspectiva específica de la asociación que se ha registrado entre las etapas de la violencia y el fracaso de alternativas de organización y movilización políticas de tipo populista.

### A mediados del siglo

En medio de la crisis social y política que de manera incontenible envolvió a la sociedad y al sistema político colombiano desde 1943, surgió el gaitanismo como fórmula que atrajo a grandes sectores populares. En las ciudades, el liderazgo carismático, los símbolos, la retórica antioligárquica y las novedosas formas de movilización política se proyectaron como garantía de autoidentificación para masas de inmigrantes recientes.

El proceso de urbanización avanzaba rápidamente. La población de los centros urbanos pasó de 1938 a 1951 de 2.692.000 a 4.468.000 habitantes. La tasa de crecimiento demográfico de Bogotá entre 1938 y 1959 llegó a 5.35%. En el lapso la población de la capital pasó de 330.000 a 670.000.<sup>35</sup>

Igualmente en el discurso gaitanista pudieron reconocerse fácilmente masas de pequeños productores, comerciantes y empleados que, además, de las exclusiones económicas y políticas no tenían tampoco la posibilidad de acceder a la organización corporativa. A esas masas Gaitán les repetía en su retórica inflamada mensajes de este tenor. "No hemos sabido entender que pueda haber una política distinta a la de darle un cambio rotundo al comportamiento de las oligarquías, las pequeñas castas que arbitrariamente se declaran superiores y en detrimento para los trabajadores, los hombres que integran la clase media, los hacendados y los comerciantes, los trabajadores sin influencia política."<sup>36</sup>

Este proceso de incorporación a la actividad de grandes sectores populares al compás de las proclamas de tipo populista y al calor de una experiencia nueva de socialización política avanzaba al tiempo que los trabajadores organizados se defendían arduamente, pero con poco éxito contra la inflación galopante contra la amenaza de un crudo liberalismo económico y más a largo plazo contra el programa de restauración reaccionaria puesto en marcha por las élites.

La derrota de la CTC entre 1945-1948 culminó una época del sindicalismo. El asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 interrumpió abruptamente la alternativa populista. Las masas urbanas habían avanzado sistemáticamente. Es cierto que esa derrota se produjo luego del levantamiento popular espontáneo que siguió al asesinato de Gaitán.

A partir de entonces la frustración alimentó la violencia y la automatización del sectarismo político bipartidista despejó todo obstáculo a la "guerra civil no declarada".

### En la etapa actual

En los años sesentas y primera mitad de los setentas se produjo el ascenso y caída de otro proyecto populista: Alianza Nacional Popular (ANAPO). Esta comenzó en 1961 como Frente Nacional por abajo cuando el ex dictador general Gustavo Rojas Pinilla emprendió una asombrosa parábola de recuperación política. El ex dictador quiso presentarse luego de

<sup>35</sup> Urbano, Campo. *La urbanización en Colombia*, Biblioteca Marxista Colombiana, Bogotá, 1977, p. 15.

<sup>36</sup> *Los mejores discursos de J. E. Gaitán*, Jorge Villaveces, Ed. Jarbi, Bogotá, s.f., p. 457.

un sonado debate que se le siguió en el Congreso por parte de los dirigentes de los partidos tradicionales como un perseguido por la oligarquía.

Otra vez las masas se movilizaron al calor de invitaciones a la revancha social y de las consignas antioligárquicas teñidas de fuerte coloración nacionalista.

La Anapo se granjeó la adhesión de las masas marginadas de las grandes urbes y de sectores empobrecidos de la población urbana y rural. El carisma de Rojas Pinilla estaba relacionado, además de los ingredientes ideológicos ya aludidos, a la dimensión pragmática que provenía del hecho de haber ocupado la Presidencia de la República. Para las masas no se trataba de una lejana conquista del poder vinculada al proyecto político de la izquierda, sino la promesa de una "recuperación" inmediata del poder.

Cuando en las elecciones presidenciales de 1970 se aplazó el retorno de Rojas Pinilla a la presidencia, en la Anapo se inició un proceso de disolución más rápido que el sorprendente ascenso. Con la proclamación de Anapo como tercer partido en 1971 se dio paso a una etapa de cualificación política de su dirección que sin embargo no se mostró apta para impedir el final del anapismo como movimiento de masas. Ese final sobrevino con la impresionante derrota en las elecciones presidenciales de 1974. Anapo, por otro lado, representó la más seria amenaza registrada hasta hoy día al sistema bipartidista colombiano.<sup>37</sup>

Así, a mediados de los años setentas, numerosos sectores populares se vieron privados de la brújula política y de las motivaciones que habían encontrado en el movimiento rojista. Esas masas no podían insertarse en el esquema excluyente del Frente Nacional o en las opciones demasiado doctrinarias que les ofrecía el Partido Comunista y las radicalizadas agrupaciones maoístas, o los vociferantes pero débiles núcleos del socialismo trotskista.

Una letra y un número pretendieron recoger el vacío dejado por la tentativa populista: M-19. Al tiempo ese código señalaba una alternativa de oposición armada al sistema.

Naturalmente, a la frustración política contribuyeron los fracasos del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y del Frente Unido, como ensayos de organización política por fuera de los marcos tradicionales. Esas experiencias más fugaces -aun que la Anapo- se desarrollaron por el mismo tiempo de la empresa anapista, pero tuvieron como referencia a sectores sociales más localizados y claros que el amplio y ambiguo universo social de Anapo.

Al comparar entonces dos períodos de violencia de mediados de siglo y la que sacude a Colombia en los años ochentas se advierte que ellos están precedidos por frustraciones de tentativas populistas muy amplias e impactantes.

La reiteración de esas coincidencias implica más que una analogía histórica, la presencia de relaciones estructurales necesarias entre los fenómenos de frustración política y de violencia. Aquí apenas se han sugerido algunas de esas relaciones.

## A manera de conclusión

Aquí se quieren señalar algunas consecuencias que se desprenden de la argumentación desarrollada en las páginas precedentes. Los períodos de expansión económica no pueden

<sup>37</sup> Un excelente trabajo sobre la Anapo es el de César Ayala Diego, *La Alianza Nacional Popular, (Anapo) en la lucha política en Colombia 1961-1974* (inédito).



asociarse de manera inmediata a las etapas de recrudescimiento de la "violencia endémica" que desde finales de los años cuarentas se convirtió en factor de la vida nacional. Antes que afirmaciones axiomáticas se han presentado las circunstancias históricas concretas que han convertido a las fuerzas económicas en vehículos de violencia. Es cierto, en la parte correspondiente se identificaron elementos potenciales de la violencia originados en las condiciones en las cuales ha transcurrido el desarrollo económico.

Las dos coyunturas analizadas, 1945-1950 y 1984-1988, no pueden homologarse. Cada una tiene sus características propias. Sin embargo, ambas tienen un elemento importante en común: son momentos de cambios económicos, en cierto modo puntos de un viraje. La primera coyuntura estuvo asociada a la adopción de una estrategia de desarrollo. La segunda, de manera más espontánea, está asociada a la culminación de toda la etapa iniciada en la postguerra y la introducción de nuevos esquemas de política económica y de desarrollo que comenzaron a aplicarse desde finales de los años setentas.

Después de los notorios avances de la investigación sobre la violencia en los aspectos regional y temático y luego de la gran sensibilización de numerosos sectores de la opinión nacional sobre la violación de los derechos humanos, la interpretación de la Violencia, en singular y con mayúscula, continúa proyectándose como el gran reto conceptual y político. Esto no excluye, antes bien supone, la continuación de trabajos sobre la violencia familiar, las particularidades regionales de la violencia, etc.

En la exposición se ha enfatizado la idea sobre la ubicación de la violencia en el centro de las contradicciones económicas, sociales y políticas del país. El desarrollo de la sociedad transcurre en un "ambiente patológico" para usar una expresión característica de K. W. Deutsch quien afirma: "Como esta compatibilidad entre los valores referentes a la supervivencia y otros valores, y en consecuencia la legitimidad de la supervivencia personal, del grupo o de la especie, depende en parte de ambientes sociales que hacen difícil la supervivencia decorosa, es decir aquellos que sólo ofrecen una baja probabilidad de coherencia de valores y de supervivencia éticamente legítima, y en los cuales los valores referentes a la muerte tienen una compatibilidad muy grande con muchos otros valores destacados."<sup>38</sup>

Esa concepción de la violencia relativiza las medidas sectoriales, las terapias parciales y destaca la necesidad de las estrategias globales. Lo que hoy se requiere es el diseño y aceptación de los parámetros básicos del desarrollo económico, de normas de funcionamiento de la sociedad civil y del alcance de la gestión estatal. Si bien se mira, en la postguerra, en los países europeos se articularon de manera más o menos explícita pactos históricos que mantuvieron su vigencia por un largo período. En algunos, como Inglaterra, hasta los años setentas.

Desde ese punto de vista serán encomiables programas de rehabilitación, campañas de educación de la población sobre el respeto a los derechos humanos. Sus alcances serán, no obstante, muy limitados mientras no avance entre los colombianos una conciencia colectiva sobre la necesidad de un acuerdo, de un pacto histórico o consenso nacional. Ese pacto histórico no se agota ni en el acuerdo Estado-movimientos guerrilleros, ni a la adopción de unas reglas de juego con los sectores emergentes. Las anteriores serían piezas claves de un concierto mucho más amplio que, necesariamente, abordaría las relaciones civiles-militares, las contradicciones obrero-patronales, la concurrencia pluralista de las fuerzas políticas, etc. Una política de paz y de instauración de derechos humanos no se puede pretender en

<sup>38</sup> K. W. Deutsch. *Los nervios del gobierno: Modelos de comunicación y control políticos*, Paidós Studio, México, 1985, p. 24.

Colombia sobre la base de la sorpresa, sino por el camino del acuerdo consciente y aceptado no solamente por las fuerzas en contienda, sino por la inmensa mayoría del país.

Si tal acuerdo no se produce, la actual etapa de modernización seguirá avanzando como lo ha venido haciendo a unos costos sociales, humanos y políticos sumamente altos y dolorosos. Contra las previsiones de sectores oligárquicos, esos costos no los están asumiendo solamente las masas, sino que crecientemente alcanzan a las élites. No es razonable esperar la victoria total de las fuerzas que hoy la buscan. Ante esa realidad se impone la transacción, el acuerdo. Por ese camino se llegaría en Colombia a esa definición mínima de democracia que Bryce proponía: "La democracia es la manera de contar cabezas sin romperlas."<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Bryce citado por Umberto Cerroni. *Regole e Valori nella Democrazia*. Editori Riuniti, Roma, 1989, p. 189.

## **La violencia en Colombia: inercias y novedades, 1945-1950, 1985-1988**

### **Abstract**

El autor analiza dos etapas de violencia o más propiamente la violencia en dos coyunturas de la historia contemporánea de Colombia: la segunda mitad de los años cuarenta y la segunda de los ochenta. Ambos momentos presentan un perfil de auge económico. Asumiendo la idea de que la violencia no ha impedido el crecimiento económico, en el artículo se intenta demostrar cómo la primera tiende en los dos momentos estudiados a convertirse en fenómeno funcional

del segundo. Esta tendencia se efectúa a través de un sistema de mediaciones que se realizan en la esfera social y en el sistema político. Ese orden de argumentación fundamenta dos insistencias: 1. La violencia no es un fenómeno sectorial y, por tanto, no es susceptible de soluciones parciales. 2. Si bien la segunda etapa de violencia analizada presenta ingredientes nuevos con respecto a la primera, son mayores las continuidades que las diferencias entre uno y otro período.

## **Violence in Colombia: Inertias and Novelties, 1945-1950, 1985-1988**

### **Abstract**

*The author analyzes two periods of violence or rather violence in two junctures of contemporary Colombian history: the second half of the forties and the second half of the eighties. Both moments exhibit a profile of economic prosperity. Assuming that violence has not been an obstacle to economic growth, the attempt is made to show how the former tended to become a functional adjunct of the latter in both moments. This trend*

*is brought about by means of a system of mediations taking place in the social sphere and in the political system. Such an order of argument gives ground to two persistencies: 1. violence is not a sectorial phenomenon and is not therefore amenable to partial solutions; 2. although the second period of violence shows new ingredients, the continuities with the first period are greater than the differences.*

